



En la canteras de basalto de Irrigoiti han aparecido las mejores datolitas del país, que han sido detectadas y en buena medida recuperadas de la destrucción merced a los avances de la cantera. Foto: G. García, 11/1996.



Fase final del montaje de la instalación de tratamiento de la nueva mina de níquel-cobre-PGM de Aguablanca, en la zona de Monesterio, el más reciente proyecto minero metálico español. Ha sido, una vez más, la difícil culminación contra las resistencias de posturas intransigentes. Foto: G. García, 8/2004.



Bella perspectiva de la salida a la Corta Atalaya (Minas de Riotinto) desde el 23 Piso del Plano Inclinado Benjumea, donde la incorporación de un recorrido subterráneo a la ruta turística no termina de concretarse, a pesar de los espectaculares enclaves de la masa "San Dionisio", únicos en el mundo. Foto: F. Piña.

EPÍLOGO: LOS EXTREMISMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Inmaculada RAMOS

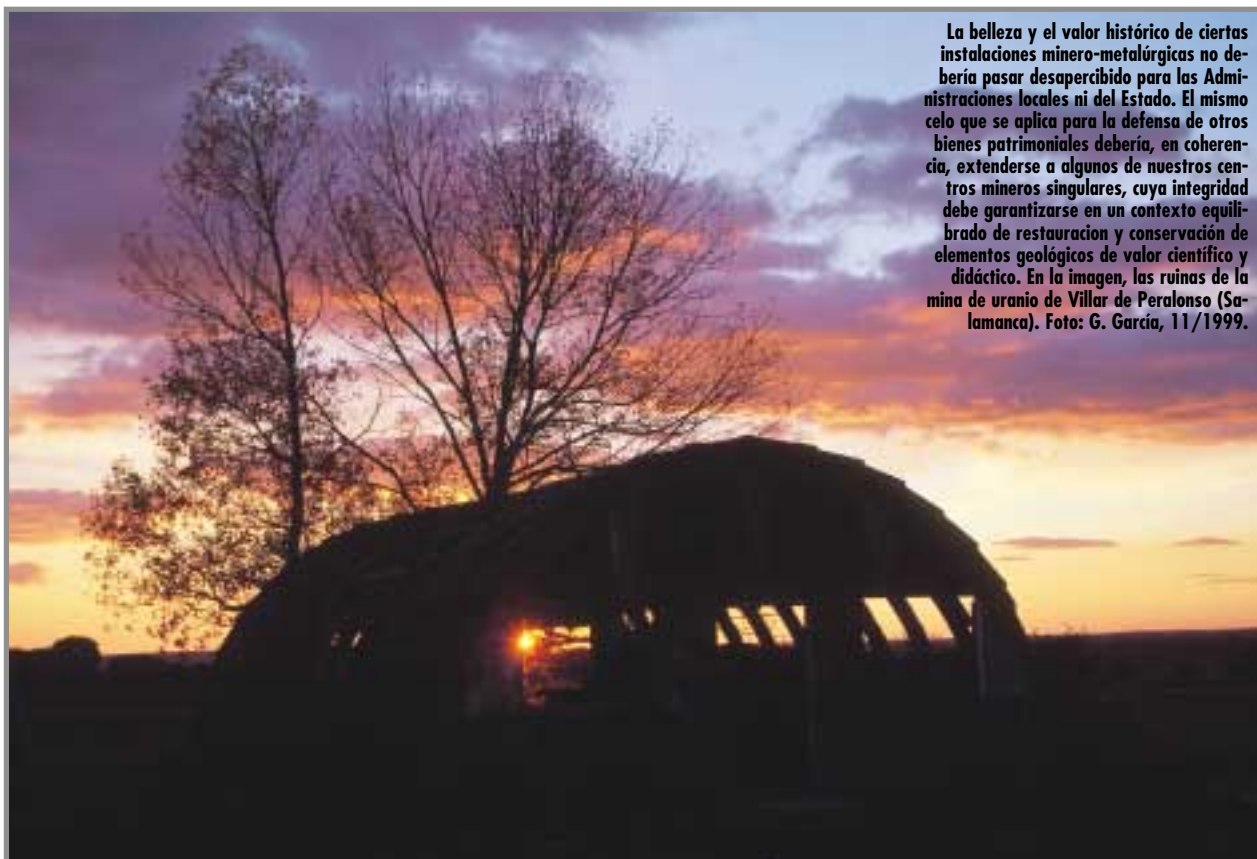
Sobre la zona de Rodalquilar existen dos figuras de protección, una creada por la Consejería de Cultura y la otra establecida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Refiriéndonos a la más reciente de ellas, diremos que se trata de la *Resolución de 7 de enero de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se resuelve inscribir colectivamente con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 44 bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Industrial relacionados con la minería de los siglos XIX y XX en la provincia de Almería*. (BOJA núm. 29, 12 de febrero de 2004).

En dicha Resolución la Consejería de Cultura no hace sino cumplir con sus competencias en materia de Patrimonio, pues tiene atribuida la formación y conservación del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, instrumento de salvaguarda de los bienes en él inscritos.

Así, de los 44 bienes que fueron seleccionados para ser inscritos, figura con el número 37 el bien denominado Minas de Rodalquilar, dentro del Término Municipal de Níjar, al que pertenece. Con ello, la Consejería de Cultura ha querido preservar lo que a su juicio era más representativo o destacado del patrimonio minero-industrial de la zona.

No olvidemos que tanto en esta inscripción colectiva de bienes originados por la minería de los siglos XIX y XX, como en otras similares realizadas en importantes distritos mineros andaluces hasta la fecha, generalmente se ha tratado de preservar estructuras o construcciones asociadas a la actividad minero-industrial desarrollada en el pasado, aunque en varias ocasiones, caso del distrito minero Linares-La Carolina, se ha incluido en la descripción de algún B.I.C. la denominación *restos de escombrera* o incluso escombrera en sí. Esto podría



La belleza y el valor histórico de ciertas instalaciones minero-metalúrgicas no debería pasar desapercibido para las Administraciones locales ni del Estado. El mismo celo que se aplica para la defensa de otros bienes patrimoniales debería, en coherencia, extenderse a algunos de nuestros centros mineros singulares, cuya integridad debe garantizarse en un contexto equilibrado de restauración y conservación de elementos geológicos de valor científico y didáctico. En la imagen, las ruinas de la mina de uranio de Villar de Peralonso (Salamanca). Foto: G. García, 11/1999.

tener varios significados: que la inclusión del término “escombrera” haya sido perfectamente estudiada y que efectivamente ésta se encuentre también bajo la figura de protección del bien inmueble catalogado, o bien que la utilización de la misma respondiese a un intento de mejorar o completar las características principales que delimitan al bien. De cualquier manera, no parece ser voluntad prioritaria de la Consejería de Cultura la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la ingente cantidad de escombreras que aún perviven en las minas andaluzas abandonadas.

Sin embargo, en el caso de las zonas protegidas hasta el momento por la Consejería de Medio Ambiente, ha ocurrido todo lo contrario, por lo que merecería un análisis mucho más extenso de lo que estas páginas pueden permitir; no obstante, se intentará esbozar, al menos, una opinión al respecto.

Para comenzar y situarnos en antecedentes de lo que hoy día es la Consejería de Medio Ambiente, se debe indicar que, durante los primeros años de Auto-

nomía, se creó, bajo la dependencia de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente (A.M.A.) que fue la primera encargada de gestionar el medio natural en aquella época.

A esta etapa inicial le sucedió una nueva situación en la que se constituyó la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, que terminó escindiéndose en dos Consejerías independientes, creándose así una específica para Medio Ambiente. A la postre, ello provocó que desde ese preciso momento el nuevo Organismo haya tenido una visión sesgada de la realidad, sustentada en criterios únicamente “biológicos”, lo cual se ha traducido en la adopción de políticas extremadamente conservacionistas y persecutorias de aquellas actividades que bajo su punto de vista no debían existir (léase el caso de la minería).

Quizá, Cultura hubiese podido aportar nuevas ideas o puntos de vista, sobre todo de cara al Patrimonio, del que como se verá más adelante, tiene mucho que decir en Andalucía. Otra cosa será que le esté permitido actuar con plena libertad

en materias cuya competencia tiene claramente atribuidas, pero que están siendo invadidas descaradamente por la Consejería de Medio Ambiente. Así, en el tema de yacimientos paleontológicos, la Consejería de Medio Ambiente inviste de autoridad a su guardería forestal, cuando: 1º) carece de competencias y, 2º) el único paleontólogo de la Junta de Andalucía está adscrito a la Consejería de Cultura.

Aún no se ha descrito la figura de protección que Medio Ambiente ha generado para la zona. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar fue declarado mediante el Decreto 314/1987, de 23 de diciembre, mientras que el 25 de octubre de 1994, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 418/1994, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, al que nos referiremos en el texto como P.O.R.N.

Asimismo, en 1997, el referido Parque Natural fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.



También el colectivo de aficionados debe concienciarse respecto a la conservación de los elementos mineros de época. Algunos indeseables están convirtiendo las minas en lugares repugnantes, lejos del respeto que deben a la mina y a los demás aficionados. En la imagen, Túnel del Arteal. Foto: G. García, 4/1998.



Los elementos geológicos no dejan de ser un patrimonio natural a divulgar y conservar. Visto que muchos de ellos son únicamente visibles en las explotaciones mineras, son ellas mismas las que requieren un grado de protección compatible con un muestreo permitido. Imagen: espectaculares filones de cromita-niquelina en la mina "La Gallega", de Ojén (Málaga). Foto: G. García, 12/2003.



La minería es una de las garantías de nuestra calidad de vida, y esto es algo que no parecen entender algunos, ridiculamente empeñados en obstruir esta industria. Cantera de pizarras en León. Foto: G. García, 11/1998.

El Parque ocupa 49.663 Ha, de las que más de tres cuartas partes son terrestres y el resto marinas. El área de influencia socioeconómica del mismo está constituida por los municipios de Almería, Níjar y Carboneras, aunque es Níjar, con un 71% del territorio el que mayor superficie aporta al Parque.

La finalidad del P.O.R.N. fue la la ordenación general de los recursos del Parque Natural, según lo establecido en la Ley 4/1989, de ámbito estatal. Entre sus objetivos figura: *Establecer normas para la preservación de los georecursos culturales del Parque Natural frente a su explotación minera, prohibiendo de forma expresa su implantación en deter-*

minados ámbitos del Parque Natural y contribuyendo al control de las especificaciones contenidas en sus Planes Técnicos (explotación y restauración de impactos generados). (Ver Art. 4.2.e.).

Pero, sin duda lo que más estupor puede producir a los lectores de esta revista es lo que manifiesta en su Artículo 31: *Se prohíbe la recolección, maltrato y destrucción de elementos o yacimientos de minerales y fósiles.* Lo asombroso de este artículo es que se queda ahí, sin concretar ni especificar a qué yacimientos se está refiriendo y sin establecer, por supuesto, excepciones de ningún tipo a lo largo del mismo documento, cuando, sin ir más lejos,

sí que las recoge para la fauna y flora protegidas.

La lectura del P.O.R.N. sigue produciendo perlas del tipo: *Se intensificarán los mecanismos de control del cumplimiento de los Planes de Restauración de los espacios alterados por la actividad minera a cielo abierto* (Art. 33), lo cual pretende ser una innovación respecto a la legislación sectorial que regula la restauración minera y en la que, por cierto, ya se contemplan fianzas e incluso posibles caducidades de los derechos mineros en caso de incumplimiento que, naturalmente, deberá ser determinado por la autoridad minera y no por un agente de medio ambiente.

Seguimos leyendo y en su artículo 35 indica que "La AMA (actual Consejería de Medio Ambiente) *potenciará el aprovechamiento didáctico científico, frente a cualquier otro tipo de aprovechamiento económico.*" Esta concepción excluyente de actividades económicas sin más, se comentará más tarde, pero a primera vista choca frontalmente con los intereses de las asociaciones mineralogistas, puesto que se potencia ese tipo de uso y al mismo tiempo (Art. 31) prohíbe de forma tajante la recogida de minerales y fósiles, sin excepciones. Inexplicable.

Para intentar comprender la regulación del Parque, debemos acudir a la legislación que puede dar cobertura a



La práctica totalidad de aficionados a la mineralogía lo son, por extensión, a la Naturaleza. Calificar genéricamente a estos entusiastas como expoliadores del medio natural, es una simplificación burda y absurda, y supone olvidar, además, que buena parte del avance en la Mineralogía de los últimos 20 años se apoya en su intensa y apasionada labor. En la imagen, noble edificio minero de Linares (Jaén). Foto: G. García, 5/1999.

las figuras de protección, tanto cultural como medioambiental. De ese modo, a nivel estatal tenemos:

a) Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

b) Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres.

Y a nivel autonómico andaluz:

a) Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección.

b) Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Como introducción a la legislación citada, entresacaremos algunos de sus artículos más destacados de cara a la afición mineralógica y a la minería en sí misma.

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Art. 1.2.- *Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas*

arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Art. 40.1.- *Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.*

De la lectura de este artículo, incluido en el Título V (Del Patrimonio Arqueológico), se deduce fácilmente que hace una evidente referencia a los yacimientos paleontológicos correspondientes al Cuaternario, que puedan contener restos de homínidos o de mamíferos coetáneos.

A pesar de la manifiesta claridad con la que en su día se redactó esta Ley, se ha producido una aparentemente injusta persecución de todos aquellos aficionados a la Paleontología que se han venido dedi-

cando a la recogida de fósiles correspondientes a otras etapas geológicas no relacionados directamente con la historia evolutiva de la especie humana. Naturalmente, dicha afición se entiende ejercida de manera responsable y respetuosa con aquellos yacimientos que por su singularidad y, a pesar de no estar vinculados al Cuaternario, pudiesen haber sido protegidos por la Ley de Patrimonio.

Tal vez por desconocimiento o, simplemente por conveniencia o dejadez, se ha aceptado esta burda interpretación de la Ley de Patrimonio Histórico. No cabe duda que los yacimientos paleontológicos importantes deben ser preservados del expolio, al igual que lo son los arqueológicos, pero esa protección debe hacerse de una manera coherente, no pudiendo extenderse sin más justificación a cualquier fósil español. Habrá que establecer, en cualquier caso, unas pautas de identificación que permitan distinguir aquello que según la Ley merece el interés que pregonaba la Ley.

Si todo lo que indica la Ley, tuviese o no valor, se considerase Patrimonio Histórico, se produciría un verdadero caos estatal. Es una aberración exten-



Un ejemplo reciente de afectación del patrimonio geológico: la mina de "San Lino", en la costa asturiana, yacimiento clásico de cristales de cuarzo herkimmer y geodas de calcita en los sedimentos triásicos, terraplenada en la construcción de la autovía del Cantábrico . Foto: G. García, 8/1996. y 8/2000.

der la protección a bienes que no lo merecen y, además, sin haber realizado una valoración previa.

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres.

Art. 13.- *Los Parques son áreas naturales, pero transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, cuya conservación merece una atención preferente.*

Si el P.O.R.N. del Parque se redactó sobre la base de lo establecido en la presente Ley, analicemos ésta para intentar comprender la redacción del primero.

Ante el enunciado del Art. 13 surge la duda: ¿son las minas abandonadas o los yacimientos minerales formaciones geomorfológicas?. Parece, cuando menos, más que discutible.

Según el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, la **geomorfología** se define como "Parte de la geología que estudia la estructura de la corteza terrestre y su evolución". Si ahora las escombreras de una zona minera son formaciones geomorfológicas, pues las trincheras del ferrocarril o, incluso, las que se cavaron durante la Guerra Civil, también tendrán el mismo calificativo.

Lo que sí está muy claro es que la Consejería de Medio Ambiente identifica todas aquellas palabras relaciona-



Colada de cristales de melanterita formada en los drenajes de los acopios de pirita de las minas de Tharsis (Huelva). Foto: G. García, 12/2001.

das con la geología-minería como algo que es necesario prohibir, castigar, aniquilar,...en resumen, cualquier sinónimo es igualmente válido para los fines que la Administración Medioambiental autonómica persigue.

Parecería más lógico proteger un determinado yacimiento mineralógico, no ya por un Parque Natural, sino mediante la figura del Monumento Natural, tal y como se establece en el Art. 16 de esta misma Ley.

Art. 16. -1.- *Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.*

2.- *Se considerarán también Monumentos Naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la sin-*

gularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

Esta misma Ley también recoge una posible limitación a determinadas actividades, en su Artículo 13.2.

Art. 13.2.- *En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación.*

A pesar de lo indicado en este último artículo, la propia Ley, en su Art. 1.- define como objeto de la misma, en cumplimiento del Artículo 45.2 y conforme a lo dispuesto en el Art. 149.1.23ª de la Constitución Española, el establecimiento de normas de protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales. Pero no sólo de los recursos naturales que reconoce la Consejería de Medio Ambiente, sino de TODOS, incluyendo, muy a pesar de los medioambientalistas extremos, los recursos mineros.



La Comunidad Andaluza posee un vasto patrimonio minero. No cabe aplicar indistintamente los mismos criterios de restauración a todo el territorio. Se requiere conocimiento para desarrollar en cada caso la fórmula más adecuada. En la imagen, ruinas de la mina de bismuto "Lolita", en Córdoba. Foto: G. García, 11/1995.

Como contrapartida a la prohibición de recoger minerales que establece el P.O.R.N., hallamos en el Art. 14 de la Ley 4/1989 una figura más restrictiva que el Parque Natural. Se trata de las Reservas Naturales, para las cuales se establece la prohibición de recoger material biológico o geológico (no dice expresamente mineralógico), dejando abierta la posibilidad de obtener autorización administrativa por razones de investigación o educativas. Visto lo cual, no deja de ser, cuando menos, sorprendente, la actitud adoptada por la Consejería de Medio Ambiente en un Parque Natural, que posee menor rango de protección que la Reserva, y en el que sin embargo prohíbe sin excepciones ni paliativos la recolección de minerales y fósiles.

Si continuamos el examen de la Ley 4/1989, descubriremos algo que parecen no haber leído nunca en la Consejería de Medio Ambiente. Se trata de la Disposición Adicional Tercera, que indica que *"Lo establecido en la presente ley se entiende sin perjuicio de la aplicación directa de otras leyes estatales específicas reguladoras de determinados recursos naturales respecto de las que esta ley se aplicará SUPLETORIAMENTE"*.

Lo que viene a decir esta Disposición es algo de sobra asumido por el Legislador, o sea, que aún en el caso de venir



La incompetencia de las administraciones suele acompañar al cómodo hábito de "prohibir" genéricamente ciertas actividades que en realidad ni conocen ni comprenden. En la imagen, búsqueda de oro a la batea, una actividad de ocio que se practica libremente en todo el mundo menos en España, donde se requiere solicitar permiso a la Confederación Hidrográfica, que lo considera ridículamente *"Obra en Cauce"*. Foto: G. García 2002.

expresamente reflejado, no podría ser de otro modo, porque no cabe la derogación tácita de una ley en virtud de otra posterior, cuando la materia legislada por ambas no es la misma. Por lo tanto, los textos legales que se ocupan de los recursos naturales no comprendidos en el ámbito de esta Ley (sin ir más lejos, la Ley de Minas), están ahí y permanecerán incorporados al ordenamiento jurídico español mientras no sean derogados.

Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección.

Esta Ley protege alrededor de un 17% del territorio andaluz mediante 6 figuras posibles: Parque Natural, Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural, Reserva Natural Concertada y Parque Periurbano.

En su Exposición de Motivos indica que *"la idea de conservación debe de entenderse en sentido amplio, por lo que inherente a la misma, tiene que ir aparejado el fomento de la riqueza económica..."*. Pero en Andalucía la conservación de la naturaleza se entiende como un uso excluyente del territorio, haciéndola incompatible casi siempre

con determinadas actividades, y particularmente las mineras.

Además de lo comentado, esta Ley clasifica las infracciones administrativas en materia de espacios naturales protegidos, graduando la cuantía de las sanciones correspondientes.

Para las infracciones leves se establecen multas de 60,10 a 601,01 Euros, para las graves, multas de 601,02 a 60.101,21 Euros, y para las muy graves, multas que van desde los 60.101,22 Euros hasta 300.506,05 Euros.

Entre las infracciones graves se contemplan *"Las acciones que directa o indirectamente atenten contra la configuración geológica o litológica de los terrenos produciendo su deterioro"*.

Como dato se debe indicar que actualmente la superficie protegida en Andalucía supera 1.500.000 hectáreas.

Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En el ámbito que nos ocupa, esta Ley no aporta novedades respecto a la Ley 16/1985. Tan sólo menciona de pasada en su Art. 2.1.- que *"El Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, en cuanto se encuentran en Andalucía y revelan un interés*



La recolección de especímenes para el coleccionismo y para la investigación es una actividad tan antigua como inocua para la naturaleza, comparada con el efecto de la extracción industrial, por otra parte tan necesaria. La “reciente” moda de cuestionarla es un significativo síntoma de ignorancia. Foto: G. García.



La sufrida minería andaluza encuentra ahora una oportunidad de recuperación, con la excelente cotización del cobre. En la imagen, la mina de Aguas Teñidas, en Huelva. Foto: G. García, 8/2004.

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad Autónoma Andaluza”.

Parece olvidar con ello el interés geológico, aunque podría considerarse incluido en el científico.

De cualquier modo, el procedimiento al que se han visto sometidos determinados Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) minero-industriales conlleva, al menos, algo de la rigurosidad y detalle que serían deseables para cualquier formación geológica de interés singular que mereciera ser protegida.

La Consejería de Cultura y la legislación sobre Patrimonio Histórico, que le atribuye las competencias en dicha materia, podrían ser perfectos instrumentos de inventariado y declaración de B.I.C. geológicos en los que se incluyeran yacimientos minerales. Sin embargo, hasta la fecha, la Consejería de Cultura no ha hecho uso de esas atribuciones concretas (patrimonio geológico), posibilitando la actuación siempre unilateral y poco escrupulosa de la Consejería de Medio Ambiente que, lejos de regular o compatibilizar posibles usos, se ha dedicado a prohibir sistemáticamente.

Una vez efectuado este recorrido por algunas de las Leyes protectoras del Patrimonio o de los Espacios Naturales, no se puede obviar que la propia Constitución Española o la Legislación Minera son primordiales a la hora de interpretar las limitaciones impuestas



Otro caso de protección desproporcionada: en los Parques Nacionales, la recolección de muestras está prohibida, lo que afecta por ejemplo a los yacimientos de blenda acaramelada más importantes del mundo (caso de Picos de Europa, tema que será próximamente abordado por BOCAMINA). Foto: G. García, 1995.

por otras normas legales posteriores. En ese sentido, el siguiente apartado tratará de exponer algunos de los argumentos olvidados por nuestros gobernantes desde que comenzó el declive de la minería metálica española, que no del sector minero en su conjunto, que es dignamente pujante teniendo en cuenta el acoso al que se le somete.

La Constitución Española y la Legislación Minera frente a la protección del medio ambiente.

Es obvio que tanto la Constitución Española como la Legislación Minera siguen estando vigentes en España. Otra cosa bien distinta es que sean maltratadas por desconocimiento de las mismas o por simples errores de interpretación, intencionados o no.

Con la afición a los minerales ocurre otro tanto, pues ha dependido en gran

manera de que existan minas activas o, al menos, escombreras abandonadas, y de que no se trate, desde diversas instancias de la sociedad, de menospreciarla o considerarla un tipo de expolio ya sea al medio ambiente, ya sea al patrimonio.

La prueba patente de que la minería ha sido prácticamente abandonada a su suerte por los políticos de turno, se halla en el propio P.O.R.N. que hemos venido comentando. En el año 1995, el Gobierno Estatal formalizó conflicto positivo de competencia, en relación con el Decreto 418/1994, por el que se aprobó el P.O.R.N. del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ante el Tribunal Constitucional. El motivo principal fue la supuesta invasión de la competencia estatal en materia de pesca marítima.

Sin embargo y a pesar de sonadas sentencias de ese mismo Tribunal a las pre-

tensiones excesivamente protectoras del medio ambiente frente al desarrollo de actividades mineras, a nadie pareció importar que la aprobación de este P.O.R.N. supondría ir en contra de la doctrina jurisprudencial que, aún habiendo establecido que era posible denegar el otorgamiento de un derecho minero por lesionar superiores intereses paisajísticos, agrícolas o ganaderos, también matiza que hay que demostrar los daños y perjuicios que ocasionarían las labores mineras, así como que los intereses lesionados sean superiores a los intereses mineros.

En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo (TS) en Sentencia de 21 de octubre de 1983, que viene a confirmar el otorgamiento de una concesión de explotación frente a la genérica alegación de conservar el medio ambiente: *“.....respecto de la conservación del medio ambiente, es por supuesto alegación insuficiente por sí sola para anular una concesión de explotación minera, puesto que la propia naturaleza de este tipo de trabajos necesariamente ha de implicar una alteración ecológica y modificación del entorno donde está situada la mina, cuya concesión cumple también las miras sociales de las necesidades colectivas satisfechas por la extracción de mineral y el PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONSAGRADO EN SU ARTÍCULO 45 NO ES UN PRECEPTO PROHIBITIVO DE ESTAS ACTIVIDADES, sino un mandato dirigido a los poderes públicos para que velen “por la utilización racional de todos los recursos naturales”, armonizar su disfrute y defender y restaurar el medio ambiente, de ahí que quepa dentro de esta utilización racional una explotación de minería, a la que sólo cabrá exigir la observancia de las normas tendientes a atenuar o aminorar la inevitable alteración de la naturaleza, a realizar los trabajos con arreglo a “lex artis” y en el caso que nos ocupa, además de la inspección realizada por el organismo administrativo competente y el control de los planes de trabajo, el informe pericial emitido en autos es acreditativo de que la explotación de la con-*



Pozo “San Miguel”. Filón “El Mimbres”. Linares (Jaén). Con sus 1.008 metros de profundidad, es posiblemente el pozo minero más profundo de España. Foto: G. García, 1/2000.

cesión se realiza de una forma correcta desde el punto de vista minero”.

Se pueden citar otras sentencias del TS con contenido similar, como la de 10 de julio de 1985, o incluso la STC nº 64/1982, en la que se planteó un Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley catalana 12/1981. Esta última Sentencia recuerda en su texto, entre otras cuestiones, que la técnica de la restauración está admitida por el Art. 45 de la Constitución Española cuando éste habla expresamente de “defender y restaurar el medio ambiente”. También recuerda que, pese a ser una ley preconstitucional (argumento muy usado por quien no la conoce bien), la Ley de Minas muestra que la armonización de la protección del medio ambiente con la explotación minera no es contraria a sus principios, sino que se apoya en ellos (Ver arts. 5.3, 17.2, 34.3, 66, 69.1 y 81 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas).

Asimismo, la referida Sentencia recoge también que *“si bien la imposición de una carga adicional para la protección del medio ambiente no es en sí contraria a la Constitución, sí lo es la prohibición con carácter general de las actividades extractivas de las secciones C y D, que son las de mayor importancia económica, en una amplia serie de espacios... Cuestión distinta es que puedan prohibir la actividad minera en casos concretos, siempre que no exista un interés prioritario, debe tacharse de inconstitucional por exceder la fina-*

lidad de la Ley y por substraer a la riqueza nacional posibles recursos mineros...

.... Este criterio de ponderación de los intereses en presencia cobra particular relieve cuando el Estado en defensa de la economía nacional haya declarado en cualquiera de las formas legalmente posibles la prioridad de determinadas actividades extractivas. En esta circunstancia es de presumir que el fomento de esas actividades declaradas prioritarias requiere considerarlas prioritarias respecto al medio ambiente en tanto el Estado no declare en forma expresa esta última prioridad y sin perjuicio de que se tengan en cuenta las circunstancias de cada caso concreto”.

Esta última sentencia no haría sino confirmar lo regulado por la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, en virtud de la cual *La clasificación de una sustancia como prioritaria implicará su declaración de interés nacional, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Minas (Art. 3.a).*

De ese modo, el R.D. 647/2002, de 5 de julio, declara una serie de materias primas prioritarias entre las que se encuentran los metales preciosos, como el oro que en su tiempo apoyó al desarrollo de las Minas de Rodalquilar.

Además, por si esto fuera insuficiente para comprobar la barbaridad que ha cometido la Consejería de Medio Ambiente con el P.O.R.N. aquí tratado, así como con la mayoría de los que ha aprobado para la Comunidad Andaluza, resulta que



Pozo de la mina de "Puerto Blanco", en Cazalla de la Sierra (Sevilla). Edificaciones del s. XIX. Foto: G. García, 8/2004.



Desde su aparición en 1994, la revista BOCAMINA ha trabajado desde sus limitados medios pero con constancia para la divulgación de la mineralogía, la minería, la geología, el patrimonio minero-industrial y en apoyo de la industria minera y de un acceso libre a los yacimientos. Foto: J. M. García Nieto, 16/12/1994.

el Parque se ubica sobre la Zona de Reserva Definitiva a favor de Estado, dispuesta por Orden de 28 de enero de 1946, para yacimientos de oro en Término de Níjar, de la provincia de Almería.

Las Reservas del Estado son figuras que contempla la Ley de Minas y su Reglamento, y cuyo establecimiento en una zona implica la declaración de interés nacional para el recurso o recursos objeto de la misma. En este caso, el oro.

Por todo lo expuesto, se hace harto difícil comprender las motivaciones especiales que impiden a la Consejería de Medio Ambiente tener en cuenta las alegaciones formuladas, no ya en contra de todos los P.O.R.N. de los Parques Naturales andaluces (que seguro que muy pocos se molestaron en recurrir), sino al menos aquellas que envió no hace mucho la AMYP (Asociación de Museos, Grupos y Colecciones de Mineralogía y Paleontología) y algunas decenas de particulares, en contra de la aprobación del Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que se declaró el Paisaje Protegido de Río Tinto, cuyo texto contenía vagas referencias a la conservación de la riqueza geomorfológica originada por las actividades mineras, sin aclarar si la recogida de muestras minerales iba a estar permitida o no.

En fin, un gesto en sentido contrario a lo esperado por parte de la Consejería

aludida, sólo sería posible si las alegaciones procedieran de algún grupo ecologista, cuyas cuitas más inverosímiles son siempre atendidas por dicho Organismo, bajo amenaza de acudir a la prensa más sensacionalista e irresponsable.

Para terminar, sería deseable, por el bien de nuestra histórica afición y por el de la minería en general, que la Consejería de Medio Ambiente no continuara apostando por una política extrema dictada a espaldas de muchos colectivos sociales y de otros organismos cuyas competencias se ven claramente menoscabadas, cuando no ignoradas.

El perfecto equilibrio o desarrollo sostenible que supuestamente busca esta Consejería pasa, parece ser y según se desprende de sus actuaciones, además de por arruinar a la minería en la región, por:

- * Permitir la instalación de aparatos e impactantes generadores eólicos en la maravillosa zona de Tarifa (curiosamente también Parque Natural).

- * Consentir la construcción del embalse La Breña II, eliminando con ello el hábitat natural de innumerables especies protegidas y en peligro de extinción. Todo sea por crear más y mejores campos de golf para turistas en zonas hidrogeológicamente deficitarias, y por convertir zonas tradicionalmente de secano en auténticos vergeles de regadío.

- * Alimentar artificialmente a los buitres en el Parque Natural de Cazorla y otros.

- * Establecer comederos para ciervos y otras especies cinegéticas para que la caza sea un deporte lo más "natural" posible.

- * Conseguir que las poblaciones de lince ibérico, cangrejo autóctono y trucha común sean cada vez menores.

- * Lograr que el incendio de Ríotinto se extendiera uniformemente y afectara a una superficie que produce vértigo. Podría haber sido peor. Podría haber llegado a Sevilla.

- * Permitir que la visita a algunos Parques Naturales produzca verdaderas náuseas tras comprobar que el llamado "turismo verde" los ha convertido en cloacas.

- * Condenar a los habitantes de los Parques Naturales a servir al turismo, sin darles la oportunidad de elegir.

Y, en definitiva, por creer que con la política de prohibición de actividades mineras se acaba el problema. Aunque claro, consiguen "exportarlas" y acabaremos comprando las materias primas a nuestros vecinos marroquíes o, porque no, a China, siendo ambos lugares donde el medio ambiente ni existe y las condiciones de seguridad aún no se han inventado. Basta con leer las noticias hace unas semanas: más de 200 mineros muertos en una mina de carbón en China.

